

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DÍA 18 DE JULIO DE 2025

En la ciudad de Salamanca, a las nueve horas y treinta minutos del día dieciocho de julio de dos mil veinticinco, se reunió en la Sala de Comisiones la Junta de Gobierno en Sesión extraordinaria, bajo la Presidencia del Vicepresidente 1º D. David Mingo Pérez, por ausencia del Ilmo. Sr. Presidente D. Francisco Javier Iglesias García, con la asistencia de los Vicepresidentes 2º D. Carlos García Sierra, y 3ª Dª Eva Mª Picado Valverde y de los Diputados D. Santiago Alberto Castañeda Valle, D. Marcos Iglesias Caridad, D. Antonio Agustín Labrador Nieto, y D. Juan Carlos Zaballos Martínez, que son siete Diputados de los nueve que son los que de hecho y de derecho componen la misma, asistidos por el Secretario General accidental D. Ramón Vicente García Sánchez y la Interventora accidental Adoración Domingo Mediavilla.

No asistió la Diputada Dª M.ª del Pilar Sánchez García.

133.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL DÍA 11 DE JULIO DE 2025.

Se da lectura por el Sr. Secretario del Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada el día once de julio de dos mil veinticinco.

Y la Junta de Gobierno, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda prestarles su aprobación.

134.- EXPEDIENTE: 2025/GAC_01/001044. PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y BASES PARA LA SUBVENCIÓN A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA MENORES DE 20.000 HABITANTES, PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE CENTROS ESCOLARES DEL MEDIO RURAL PARA LOS AÑOS 2025/2026.

Conoce la Junta de Gobierno del siguiente informe del Jefe de la sección de deportes.

“Por resolución de la Presidencia de fecha 10 de junio de 2025, se aprobó el Convenio de colaboración con la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, para la realización de obras de reparación, conservación y mejora de Centros Escolares del Medio Rural para los años 2025/2026, autorizándose para tal fin un gasto de 400.000 €, con la siguiente distribución de anualidades.

ANUALIDAD	APORTACIÓN DIPUTACIÓN DE SALAMANCA	APORTACIÓN JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
2025	200.000	0
2026	0	200.000
TOTAL	200.000	200.000

Por ello, el Jefe de la Sección, propone se adopte la siguiente resolución:

Primero.- Aprobar la Convocatoria y Bases que habrán de regir en la concesión de subvenciones a Ayuntamientos de la provincia para la realización de obras de reparación, conservación y mejora de Centros Escolares del Medio Rural de la Provincia de Salamanca, para los años 2025-2026 y con cargo a la aplicación presupuestaria 70-3230-B-4621900 “Subvención Ayuntamientos. Mejora Escuela Rural”, documentos RC n.º: 202500013846 por importe de 200.000 €, y documento CICFUT n.º: 202500027351, por importe de 200.000 €, cuantía máxima que se destina a esta convocatoria y que constituye el límite a aportar por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y la Diputación de Salamanca. Bases que se encuentran en el expediente MOAD n.º 2025/GAC_01/001044, donde aparecen firmadas por el Jefe de la Sección de Deportes con el Código Seguro de Verificación: IV7SGHJZKEMYVPBNUEGV6FPO6Y.

Segundo.- Aprobar la puesta en funcionamiento del procedimiento o trámite electrónico de la Convocatoria de Subvenciones a ayuntamientos de la provincia para la realización de obras de reparación, conservación y mejora de centros escolares del medio rural de la provincia de Salamanca, así como la tramitación electrónica de la misma a través del registro electrónico de la Diputación de Salamanca y de su Sede Electrónica, y la publicación del mismo el Boletín Oficial de la Provincia y en la propia Sede Electrónica.

Tercero.- Facultar a la Presidencia de la Corporación para la ejecución de lo acordado.”

Y Visto el informe de la Intervención General 630/2025 fiscalizado de conformidad de fecha 1 de julio de 2025.

La Junta de Gobierno, por unanimidad de los miembros presentes, eleva a acuerdo la propuesta anteriormente transcrita.

135.- EXPEDIENTE: 2025/GRH_01/001688. INFORME SOBRE JUBILACIÓN POR EDAD DE UNA EMPLEADA PÚBLICA DE ESTA DIPUTACIÓN DE SALAMANCA CON LA CATEGORÍA DE TÉCNICO SANITARIO DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL.

Conoce la Junta de Gobierno del siguiente informe del Coordinador del Área de Organización y Recursos Humanos.

“Visto que **D^a. María Victoria Alonso Arnés**, Empleada Pública de la Diputación Provincial de Salamanca con la categoría de Técnico/a Sanitaria, solicita el acceso a la jubilación, por el Área de Organización y RR.HH., se emite el siguiente informe:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. – **D^a. María Victoria Alonso Arnés**, es empleada pública de esta Corporación con la categoría de Técnica/a Sanitaria, del Área Bienestar Social, ocupando el puesto nº 50003, denominado Coordinador/a de Servicios. Según consta en su expediente ha nacido el día 20 de diciembre de 1958.

Segundo. - Mediante escrito de fecha 9 de junio de 2025, nº de registro 25e00049874133, **D^a. María Victoria Alonso Arnés**, solicita su pase a la situación de pensionista a partir del día 31 de julio de 2025, siendo, por tanto, su última jornada de relación laboral con la Diputación de Salamanca, reuniendo el requisito de edad y de cotización establecidos en la normativa vigente para el pase a dicha situación.

De conformidad con los antecedentes obrantes en la Tesorería General de la Seguridad Social, la interesada **acredita** que reúne los requisitos *de cotización* exigidos para causar derecho a la pensión de jubilación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. - El RD 480/93, de 2 de abril, por el que se integró en el Régimen General de la Seguridad Social el Régimen Especial de la Seguridad Social de los funcionarios de la Administración Local, y, en consecuencia, declaró extinguida la MUNPAL, dispone expresamente en sus artículos 1 y 7:

“Todo el personal que el 31 de marzo de 1993 estuviera en el campo de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los funcionarios de la Administración Local, quedará integrado con efectos del 1 de abril de 1993 en el Régimen General de la Seguridad Social. A partir de esta fecha, al personal indicado le será de aplicación la normativa del Régimen General con las peculiaridades establecidas en este Real Decreto.

Las pensiones de jubilación que se causen a partir del 1 de abril de 1993 se reconocerán de acuerdo con lo previsto en el Régimen General de la Seguridad Social.

Por tanto, a partir de esta fecha todo el personal al servicio de la Administración Local quedó integrado en el Régimen General de la Seguridad Social”.

Segundo. - La Disposición Transitoria Cuarta del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el [Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social](#), regula la aplicación de legislaciones anteriores para causar derecho a pensión de jubilación. El apartado 2) establece literalmente que *“Quienes tuvieran la condición de mutualista el 1 de enero de 1967 podrán causar el derecho a la pensión de jubilación a partir de los 60 años. En tal caso, la cuantía de la pensión se reducirá en un 8 por 100 por cada año o fracción de año que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la edad de 65 años.”*

Tercero. - El art. 205, apartado 1 del [Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social](#), aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, establece que tendrán derecho a la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, las personas incluidas en este Régimen General que reúnan las siguientes condiciones:

Haber cumplido 67 años de edad, o 65 años cuando se acrediten 38 años y 8 meses de cotización, sin que se tenga en cuenta la parte proporcional correspondiente a las pagas extraordinarias.

Para el cómputo de los años y meses de cotización se tomarán años y meses completos, sin que se equiparen a un año o un mes las fracciones de los mismos.

Tener cubierto un período mínimo de cotización de 15 años, de los cuales al menos 2 deberán estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho. A efectos del cómputo de los años cotizados no se tendrá en cuenta la parte proporcional correspondiente por pagas extraordinarias.

La Disposición transitoria séptima del propio Texto Refundido, establece la aplicación paulatina de la edad de jubilación y de los años de cotización hasta alcanzar la edad de 67 años, y que para el año 2025, se concreta en 65 años como edad exigida para tener derecho a la pensión de jubilación, y como periodo de cotización 38 años y 3 meses o más. En el supuesto de no alcanzar dicho periodo de cotización, la edad exigida

para tener derecho al pase a la situación de pensionista será de 66 años y 8 meses para el próximo ejercicio.

Cuarto.- El artículo 208 del [Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de](#) octubre, según redacción dada por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, modificado por el Real Decreto Ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, establece la *modalidad de acceso a la jubilación anticipada derivada de la voluntad del interesado, exigiéndose los siguientes requisitos:*

Tener cumplida una edad que sea inferior en dos años, como máximo, a la edad que en cada caso resulte de aplicación según lo establecido en el artículo 205. 1) y en la disposición transitoria séptima.

Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 35 años, sin que, a tales efectos, se tenga en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias. A estos exclusivos efectos, solo se computará el período de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria o el servicio social femenino con el límite máximo de un año.

Una vez acreditados los requisitos generales y específicos de dicha modalidad de jubilación, el importe de la pensión a percibir ha de resultar superior a la cuantía de la pensión mínima que correspondería al interesado por su situación familiar al cumplimiento de los 65 años de edad. En caso contrario, no se podrá acceder a esta fórmula de jubilación anticipada.

En los casos de acceso a la jubilación anticipada a que se refiere este apartado, la pensión será objeto de reducción mediante la aplicación, por cada trimestre o fracción de trimestre que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación que en cada caso resulte de la aplicación de lo establecido en el artículo 208 y en la disposición transitoria séptima de los coeficientes que en dicho artículo se establece en función del período de cotización acreditado.

A los exclusivos efectos de determinar dicha edad legal de jubilación, se considerará como tal la que le hubiera correspondido al trabajador de haber seguido cotizando durante el plazo comprendido entre la fecha del hecho causante y el cumplimiento de la edad legal de jubilación que en cada caso resulte de la aplicación de lo establecido en el artículo 205.1.a).

Para el cómputo de los períodos de cotización se tomarán períodos completos, sin que se equipare a un período la fracción del mismo.

Quinto. - Mediante Decreto de la Presidencia nº 3857/23, de 18 de julio, se delegó en la Junta de Gobierno la jubilación del personal al servicio de esta Corporación.

En virtud de lo anterior, procedería declarar el pase a la situación de pensionista de **D^a. María Victoria Alonso Arnés**, en los términos expresados en su solicitud, al cumplir los requisitos generales y específicos establecidos en el [Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de](#) octubre, con

efectos, por tanto, desde el día 1 de agosto de 2025, agradeciéndole los servicios prestados a esta Corporación.”

Y la Junta de Gobierno, por unanimidad de los miembros presentes, eleva a acuerdo la propuesta anteriormente transcrita.

136.- EXPEDIENTE: 2025/GRH_01/001928. INFORME SOBRE EXCEDENCIA POR CUIDADO DE FAMILIARES DE UN EMPLEADO PÚBLICO DE ESTA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA CON LA CATEGORÍA DE EDUCADOR FAMILIAR DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL.

Conoce la Junta de Gobierno del siguiente informe de a Técnico Medio de Gestión del Área de Organización y Recursos Humanos.

“Visto que Doña Inés Arconada Díez, funcionario/a interino/a en la categoría de Educador familiar adscrita al CEAS de Ledesma, Apoyo a Familias del Área de Bienestar Social de la Diputación de Salamanca, solicita excedencia voluntaria para cuidado de familiares, para atender al cuidado de un hijo menor de tres años; por el Área de Organización y RR.HH. se emite el siguiente **INFORME:**

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Doña Inés Arconada Díez es funcionario/a interino/a, en la categoría de Educadora de Familia, en el puesto 50573 adscrito al CEAS de LEDESMA del Área de Bienestar Social de la Diputación de Salamanca.

Segundo.- Con fecha 07 de julio de 2025, mediante registro de entrada nº REGAGE25e00057531005, el/la interesado/a solicita excedencia por cuidado de familiares, para atender al cuidado de un hijo menor de 3 años, por un periodo de tiempo de un año, fijando el inicio de la excedencia el día 24 de julio de 2025, pudiendo solicitar el reingreso al servicio activo a mi puesto de trabajo antes o después del 24 de julio de 2026, siendo la duración máxima del periodo de excedencia de 3 años, comunicándolo a esta administración con al menos un mes de antelación.

Tercero.- Revisada la documentación presentada, el día 3 de julio de 2025 se solicita a Doña Inés Arconada Díez la subsanación de la misma al no presentar la declaración responsable de no desempeño de actividad remunerada que impida el cuidado del menor. Con fecha 3 de julio de 2025 presenta la documentación solicitada por el Registro General de la Diputación de Salamanca nº REGAGE25e00058565088.

Cuarto.- En la documentación presentada en la solicitud consta el Certificado del Registro Civil de Salamanca, figurando el nacimiento de hijo/a el día 1 de enero de 2025, por tanto, menor de tres años.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. - Normativa aplicable.

El régimen jurídico aplicable a los funcionarios públicos está condicionado por el reparto competencial que en esta materia ha trazado el art. 149.1. 18.ª de la Constitución, en virtud del cual corresponde al Estado la competencia exclusiva para la fijación del régimen estatutario de los funcionarios de las Administraciones Públicas. No obstante, nos encontramos ante un marco legislativo en el que concurren la normativa estatal y autonómica, como así señala la STC 84/1982 (F.Jco. 4º). La normativa básica estatal en materia de función pública se regula en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. En su artículo 3.1 dispone que “*El personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto y por la legislación de las comunidades autónomas, con respeto a la autonomía local*”. Tal referencia a la “legislación estatal” ha de entenderse circunscrita a la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, cuyas previsiones tienen el carácter de básicas, y el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, que, de conformidad con las previsiones de la Disposición Transitoria 1ª de la Ley 7/1985, su contenido tiene en algunos casos carácter básico y en otros será una legislación meramente supletoria de la de las Comunidades Autónomas.

El artículo 140 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, dispone:

“1. Las situaciones en que pueden hallarse los funcionarios de carrera de la Administración local serán las siguientes:

- a) Servicio activo.*
- b) Servicio en Comunidades Autónomas.*
- c) Excedencia forzosa o voluntaria.*
- d) Servicios especiales.*

e) Suspensión.

2. Dichas situaciones se regularán por la normativa básica estatal, y por la legislación de función pública de la respectiva Comunidad Autónoma y, supletoriamente, por la legislación de los funcionarios de la Administración del Estado, teniéndose en cuenta las peculiaridades del régimen local”.

El artículo 110 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, atendiendo a la atribución competencial recogida en el art. 32.3 de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, por la que se aprueba la reforma del Estatuto de Autonomía, dispone que “*Las situaciones administrativas de los funcionarios de la Administración Local se regirán por lo dispuesto en la presente Ley en lo no regulado por la legislación estatal, teniéndose en cuenta las peculiaridades del régimen local”.*

En consecuencia, las situaciones administrativas en que pueden hallarse los funcionarios de carrera de la Administración local se rigen por la normativa básica estatal (Real Decreto Legislativo 5/2015 TREBEP) y por la legislación de función pública de la Comunidad Autónoma (Ley 7/2005 de la Función Pública de Castilla y León) y, sólo supletoriamente, por la legislación de los funcionarios de la Administración del Estado, sin perjuicio de las peculiaridades del régimen local. Dentro del respeto a tales normas, es de aplicación igualmente el Acuerdo Marco vigente para el Personal Funcionario de la Diputación de Salamanca.

Segundo. - Alcance de la normativa básica estatal.

El Estatuto Básico del Empleado Público ha reducido al mínimo, reservándose únicamente la regulación de las situaciones administrativas que considera claves para definir el marco común, hasta el punto de que las situaciones administrativas en las que se puede encontrar una persona funcionaria no tienen por qué ser las mismas en todas las administraciones públicas españolas, siempre que se respeten las comunes (servicio activo, servicios especiales, servicio en otras administraciones públicas, excedencia y suspensión de funciones), según se desprende del Art. 85.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

El artículo 85 del Real Decreto Legislativo 5/2015 TREBEP contempla como situaciones administrativas básicas de los funcionarios de carrera: servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia y suspensión de funciones. Tal regulación no agota la regulación en la materia ni constituye una enumeración cerrada, sino que el punto segundo del mismo precepto habilita a las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto para regular otras situaciones administrativas de los funcionarios de carrera, en los supuestos, en las condiciones y con los efectos que en las mismas se determinen, cuando concurra, entre otras, alguna de las circunstancias siguientes:

a) Cuando por razones organizativas, de reestructuración interna o exceso de personal, resulte una imposibilidad transitoria de asignar un puesto de trabajo o la conveniencia de incentivar la cesación en el servicio activo.

b) Cuando los funcionarios accedan, bien por promoción interna o por otros sistemas de acceso, a otros cuerpos o escalas y no les corresponda quedar en alguna de las situaciones previstas en este Estatuto, y cuando pasen a prestar servicios en organismos o entidades del sector público en régimen distinto al de funcionario de carrera.

Dicha regulación, según la situación administrativa de que se trate, podrá conllevar garantías de índole retributiva o imponer derechos u obligaciones en relación con el reingreso al servicio activo.

Por otro lado, la Disposición Final Cuarta del citado Estatuto, en su apartado 2 indica que *“Hasta que se dicten las leyes de Función Pública y las normas reglamentarias de desarrollo se mantendrán en vigor en cada Administración Pública las normas vigentes sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos en tanto no se opongan a lo establecido en este Estatuto”*.

Tales disposiciones y las circunstancias concurrentes conllevan la necesaria aplicación de la legislación sobre Función Pública de la Comunidad Autónoma, en tanto en cuanto no se oponga a la regulación básica prevista en el R. D. Legislativo 5/2015 TREBEP.

Tercero. - Situación administrativa.

Respecto a la situación administrativa en la que pasaría a encontrarse la interesada cabe encuadrarla en la de excedencia voluntaria por cuidado de familiares regulada en el artículo 92 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, que dispone: *“Los funcionarios tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del período de ésta pondrá fin al que se viniera disfrutando. Esta excedencia constituye un derecho individual de los funcionarios. En caso de que dos funcionarios fueran titulares del derecho a disfrutarlo por el mismo sujeto causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios. El período de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, consolidación de grado personal y derechos pasivos. Durante el primer año, los funcionarios tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaban. Transcurrido este período, dicha reserva lo será a un puesto en la misma localidad y de igual nivel y retribución (...)”*

Si bien dicha situación no se regula en el Estatuto Básico del Empleado Público, es de aplicación a los funcionarios de la Administración Local de Castilla y León, en virtud de lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, habida cuenta que no se opone a la norma básica estatal, que ésta habilita la regulación de otras situaciones por las leyes de Función Pública de desarrollo y que mantiene vigencia la legislación previa que no se oponga a su articulado en tanto en cuanto se dicten tales leyes de desarrollo.

Por otro lado, el precepto mencionado no efectúa distinciones en cuanto al régimen y tipo de relación de servicio del funcionario. Así, la Sentencia 240/1999 del Tribunal Constitucional, reconoce a los funcionarios interinos que tienen derecho a acogerse a la excedencia para el cuidado de hijo/hija o familiares (FJ 7 y 8), así como, en aplicación de la Directiva 1999/70/CE del Consejo de 28 de junio de 1999.

A la vez, tal situación administrativa viene contemplada en el artículo 26 del Acuerdo Marco para el Personal Funcionario de la Diputación de Salamanca, recogiendo similar regulación que la antedicha en su Anexo VII.

Cuarto.- Efectos.

En cuanto a los efectos de la declaración de excedencia voluntaria por cuidado de familiares, indica el artículo 92 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, que *."El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del período de ésta pondrá fin al que se viniera disfrutando. Esta excedencia constituye un derecho individual de los funcionarios. En caso de que dos funcionarios fueran titulares del derecho a disfrutarlo por el mismo sujeto causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios. El período de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, consolidación de grado personal y derechos pasivos. Durante el primer año, los funcionarios tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaban. Transcurrido este período, dicha reserva lo será a un puesto en la misma localidad y de igual nivel y retribución (...)"*

Las situaciones administrativas hacen referencia a los funcionarios de carrera sin incluir a los funcionarios interinos, aunque ya existe normativa de otras comunidades autónomas que han desarrollado del TREBEP incluyendo a los funcionarios interinos, si bien ha limitado la reserva de puesto de trabajo al mantenimiento de los supuestos que motivaron su nombramiento, en aplicación de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP, sobre el trabajo de duración determinada, que regula el principio de no discriminación (cláusula 4.1).

En cuanto al periodo de permanencia en esta situación, en relación con los efectos computables, la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del

Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 2020 (rec. 1365/2019), Sentencia 1678/2020 de 17 de diciembre, fija: “*las previsiones del art. 57 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tienen efecto directo sin mediación de las correspondientes bases de la convocatoria imponiendo una valoración de la situación administrativa de excedencia voluntaria por cuidado de familiares idéntica a la que se otorga a la situación de servicio activo*”. La Sentencia fija que es de aplicación directa y vinculante del artículo 57 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, por tanto, no puede suponer una desventaja el tiempo de permanencia en la situación de excedencia por cuidado de familiares en la valoración en procesos selectivos o de promoción, sino que hace una equiparación a la situación de servicio activo.

Resumiendo, la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en aplicación del artículo 57 de la Ley de Igualdad, busca garantizar la igualdad real y efectiva, evitando la discriminación indirecta que podría sufrir una persona por haber asumido responsabilidades familiares.

El plazo para solicitar el reingreso, se establece en el Anexo VII del Acuerdo Marco vigente en esta Diputación, que “*una vez producido el cese en esta situación, se deberá solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo máximo de un mes*”. En el caso que nos ocupa el interesado ha fijado en su solicitud la fecha de inicio de la excedencia que es el día 24 de julio de 2025, y su duración será, en principio de un año, por lo tanto, finalizará el día 23 de julio de 2026, aunque en la declaración responsable presentada el día 3 de julio de 2025, fija el inicio de la excedencia el día 24 de julio de 2025 y su finalización el día 24 de julio de 2026.

Quinto.- Competencia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 34.1.h) y o) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, y el artículo 61.12.g) del R.O.F., corresponde al Presidente de la Corporación la declaración de las situaciones administrativas de todo el personal, competencia que ha sido delegada en la Junta de Gobierno mediante Decreto de la Presidencia con transcrito nº 3857/23, de 18 de julio.

En virtud de lo anterior, se efectúa la siguiente

PROPUESTA

Primero.- Declarar a la funcionaria interina **Doña Inés Arconada Díez** en situación administrativa de excedencia voluntaria por cuidado de familiares, regulada en el artículo 92 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, y en el art. 26.4 del Acuerdo Marco para el personal funcionario de la Diputación de Salamanca, **con efectos del día 24 de julio de 2025** y permaneciendo en dicha situación administrativa, conforme a los términos expresados en su solicitud y en la

declaración responsable, **hasta el 24 de julio de 2026**, fecha a partir de la cual se producirá el reingreso al servicio activo.

Segundo.- Durante la situación de excedencia no devengará retribuciones, pero el tiempo permanecido en tal situación será computable a efectos de concursos, trienios, consolidación de grado personal y derechos pasivos en los términos del citado art. 92 de la Ley 7/2005 y en aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Tercero.- Notificar la resolución al interesado, indicándole que esta resolución pone fin a la vía administrativa pudiendo interponer contra la misma recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Salamanca, en el plazo de dos meses, o bien con carácter potestativo, alternativamente, recurso de reposición ante el Presidente de la Diputación en el plazo de un mes, contado en ambos casos desde el día siguiente a la notificación.”

Y la Junta de Gobierno, por unanimidad de los miembros presentes, eleva a acuerdo la propuesta anteriormente transcrita.

137.- EXPEDIENTE: 2025/GEA_01/000360. PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LAS CONDICIONES Y COMPROMISOS DE LA CONCESIÓN DIRECTA DE UNA SUBVENCIÓN POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO, COMO VIVERO DE EMPRESAS EN C/ ALCALDE ÁNGEL BLÁZQUEZ, Nº 1 DE BÉJAR.

Conoce la Junta de Gobierno del informe del Director del Área de Economía y Hacienda.

Vista la providencia de inicio del expediente relativo a la concesión directa de una subvención por razones de interés público para la construcción de un nuevo edificio compuesto por un conjunto de seis naves industriales adosadas, sin uso previamente definido, como vivero de empresas en la parcela nº 9 del polígono “Béjar industrial”, en calle Alcalde Ángel Blázquez, n.º 1 de Béjar.

Visto informe jurídico con propuesta de resolución -que se emite en cumplimiento de lo señalado en el artículo 175 del real decreto 2568/1986, de 28 de

noviembre- relativo a la aprobación de las bases reguladoras de la concesión de directa de una subvención por razones de interés público para la construcción de un nuevo edificio compuesto por un conjunto de seis naves industriales adosadas, sin uso previamente definido, como vivero de empresas en la parcela nº 9 del polígono “Béjar industrial”, en calle Alcalde Ángel Blázquez, n.º 1 de Béjar.

Vista la fiscalización del expediente que se lleva a cabo de forma favorable mediante el informe de fiscalización Núm. 692/2025 de fecha 14 de julio de 2025 emitido por la Intervención provincial en aplicación de lo estipulado en el artículo 214.a) del TRLRHL el expediente citado se encuentra sometido a intervención previa, al ser susceptible de producir obligaciones de contenido económico.

Teniendo en cuenta el Decreto de Delegación de la Presidencia Provincial en la Junta de Gobierno núm. 3857/23 de 18 de julio, que atribuye a dicho órgano corporativo la competencia para aprobar el presente expediente, ya que, en este caso concreto, su aprobación implica un gasto cuyo importe supera los 60.000 €.

En consecuencia, con lo expuesto, se realiza la siguiente:

PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO

Primero. - Aprobar las bases que regulan las condiciones y compromisos de la concesión directa de una subvención por importe de novecientos cincuenta mil euros para financiar la construcción de un nuevo edificio compuesto por un conjunto de seis naves industriales adosadas, sin uso previamente definido, como vivero de empresas en la parcela n.º 9 del polígono “Béjar industrial”, en calle alcalde Ángel Blázquez, n.º 1 de Béjar que constan con el Código Seguro de Verificación IV7TXXZC3L5JTCVP256N653TCM.

Segundo. - Que como consecuencia de lo anterior se autorice el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 18 9120E 762.00.00 Programa de innovación y emprendimiento por importe de novecientos cincuenta mil euros.

Tercero. - Poner a disposición del Ayuntamiento de Béjar los anexos correspondientes a la solicitud y a la justificación de dicha subvención en la siguiente dirección:

http://www.lasalina.es/economiayhacienda/gestionpresupuestaria/Innovacion_y_emprendimiento/2025/

Y la Junta de Gobierno, por unanimidad de los miembros presentes, eleva a acuerdo la propuesta anteriormente transcrita.

138.- EXPEDIENTE: 2025/GAC_01/0001221. PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y BASES PARA LA SUBVENCIÓN A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA Y SUS CENTROS DE ENSEÑANZA QUE TOMEN PARTE EN LA REALIZACIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS Y TECNIFICACIÓN ESCOLAR CORRESPONDIENTES AL AÑO 2025-2026.

Conoce la Junta de Gobierno del siguiente informe del Jefe de la sección de deportes.

“La Excma. Diputación Provincial de Salamanca, tiene entre sus competencias, al amparo del artº 36.1d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el fomento de los intereses de la provincia.

Que con el fin de promover, mantener y fomentar el deporte en nuestra provincia, y consolidado el funcionamiento de las escuelas deportivas que habitualmente se vienen realizando a través de los diferentes ayuntamientos y sus centros de enseñanza, se ha procedido a redactar las bases que habrán de regir la convocatoria pública para la subvención a los ayuntamientos de la provincia y sus centros de enseñanza que deseen tomar parte en la misma y correspondiente al año 2025-2026 (periodo 1 de octubre de 2025 y el 24 de junio de 2026).

Visto el acuerdo de incoación de expediente administrativo para el desarrollo de dicha convocatoria, de fecha 23 de junio de 2025, efectuada por el Diputado Delegado de Deportes D.Jesús Mª Ortiz Fernández.

El Jefe de la Sección, propone se adopte por la Junta de Gobierno la siguiente resolución:

Primero.- Aprobar la Convocatoria para la Subvención a Ayuntamientos de la provincia y sus centros de enseñanza que deseen tomar parte en las Escuelas Deportivas y tecnificación escolar, correspondiente al año 2025-2026 (periodo 1 de octubre de 2025 y el 24 de junio de 2026) y aprobación de las Bases que regirán la misma, y que se encuentran disponibles en el Expediente MOAD nº 2025/GAC_01/001221, donde aparecen firmadas por el Jefe de la Sección de Deportes con el Código Seguro de Verificación IV7TULRSD5WCRFN3TRYNMITXIA.

Segundo.- Aprobar el gasto que supone la convocatoria por importe de CIENTO SIETE MIL EUROS (107.000.-), con cargo a la aplicación presupuestaria 72-3410-B-4620000 “Subvenciones Ayuntamientos”, quedando sometida su disponibilidad a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuada y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de esta convocatoria de subvenciones en el año 2025-2026, RCFUT nº 202500021159.

Tercero.- Aprobar la puesta en funcionamiento del procedimiento o trámite electrónico de las Escuelas Deportivas, así como la tramitación electrónica del mismo a través del registro electrónico de la Diputación de Salamanca y de su Sede Electrónica, y la publicación del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia y en la propia Sede Electrónica.”

Y visto el informe de la Intervención General 648/2025 de fecha 3 de julio de 2025, fiscalizado de conformidad.

La Junta de Gobierno, por unanimidad de los miembros presentes, eleva a acuerdo la propuesta anteriormente transcrita.

RUEGOS Y PREGUNTAS

No se formularon.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las nueve horas y treinta y cinco minutos, extendiéndose la presente Acta, que firma conmigo el mismo y de cuyo contenido, como Secretario General accidental doy fe.

EL PRESIDENTE ACCTAL,

EL SECRETARIO ACCTAL.

DILIGENCIA. - Para hacer constar que este Acta correspondiente a la Sesión Extraordinaria del día dieciocho de julio de dos mil veinticinco, contiene quince folios numerados del al y foliados del cuatrocientos veinticinco al cuatrocientos treinta y nueve.

EL SECRETARIO GENERAL,